

REPÚBLICA DE COLOMBIA



RAMA JUDICIAL

TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN

SALA CUARTA DE DECISIÓN LABORAL

Medellín, dieciocho (18) de julio de dos mil veintidós (2022)

La Sala Cuarta de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín, integrada por los Magistrados CARLOS ALBERTO LEBRÚN MORALES (ponente), MARIA EUGENIA GÓMEZ VELÁSQUEZ y NANCY GUTIÉRREZ SALAZAR, cumplido el traslado de que trata el artículo 15 del Decreto 806 de 2020, se procede a dictar la sentencia que corresponde en este proceso ordinario de doble instancia instaurado por NATALIA LONDOÑO ROMERO contra la ADMINISTRADORA DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A, siendo vinculada como interviniente excluyente ANGELA DEL CARMEN BARRIENTOS ESCUDERO (fl. 149) (Radicado 05001-31-05-005-2019-00252-01).

ANTECEDENTES

Pretende la demandante se condene a Porvenir S.A al reconocimiento y pago de una pensión de sobrevivientes con ocasión de la muerte de su compañero permanente Juan Camilo Barrientos Barrientos a partir del 12 de junio de 2016, con las correspondientes mesadas adicionales, los intereses de mora que contempla el artículo 141 de la Ley 100 de 1993 o la indexación y las costas procesales.

Como fundamento a sus pretensiones, narró que vivió en unión libre con Juan Camilo Barrientos entre el 13 de junio de 2003 y hasta el 12 de junio de 2016, cuya convivencia se desarrolló en los municipios de Belmira, San Pedro de los

Milagros y San Félix, todos en Antioquia, contando Juan Camilo con diferentes empleadores que efectuaron cotizaciones al Sistema para los riesgos de invalidez, vejez y muerte. Explica que el inicio de la convivencia tuvo inicio cuando ella contaba con 15 años y una hija de dos años que Juan Camilo acogió y él tenía 18 años, estando desde el año 2011 afiliados a la EPS Coomeva, figurando ellas como sus beneficiarias. Por declaración juramentada fechada del 03 de febrero de 2012 Juan Camilo Barrientos declaró vivir en unión libre con Natalia Londoño “desde hace diez años”. El 12 de junio de 2016 falleció Juan Camilo Barrientos, cuando la vida en común permanecía. Efectuó reclamación de la pensión de sobrevivientes ante Porvenir S.A, recibiendo respuesta negativa por comunicación del 05 de mayo de 2017, requiriendo por dicho de la madre al advertir su estado civil soltero, la sentencia declarando la existencia de la unión marital de hecho. El 19 de noviembre de 2018 radicó nueva solicitud para nuevo estudio del derecho, recibiendo respuesta el 27 de noviembre de 2018 dirigiéndola a la información y requerimiento previo.

PORVENIR S.A dio respuesta al libelo dando razón a los hechos referidos al fallecimiento, la afiliación de beneficiarias a la EPS, la solicitud y negativa del derecho a la pensión por muerte. Afirmó no constarle convivencia vigente para la data de la muerte y que la hija de la demandante se constituyera en la hija de crianza del fallecido, advirtiéndole la existencia de un conflicto de beneficiarias entre madre y compañera permanente. Como medios de oposición propuso las excepciones de mérito que denominó Inexistencia de la obligación, cobro de lo no debido, ausencia de derecho sustantivo y falta de causa en las pretensiones de la demanda, buena fe de la entidad demandada, prescripción, compensación e improcedencia de imposición de condenas accesorias.

Mediante auto del 11 de julio de 2019 se dispuso vincular a la Litis a la señora ANGELA DEL CARMEN BARRIENTOS ESCUDERO en su calidad de madre del fallecido como interviniente excluyente (fl. 149), quien promovió demanda arguyendo los siguientes fundamentos fácticos: Es cabeza de hogar, sin que haya laborado de manera formal por lo que no cuenta con cotizaciones al Sistema. Convive con su hijo Iván Darío Barrientos de 27 años de edad con

diagnósticos como hidrocefalia y paraplejia de miembros inferiores, mismo que dependía económicamente de Juan Camilo Barrientos, quien inició a laborar en fincas lecheras desde sus 16 años en San Pedro de los Milagros, representando el gasto de comida, pañales y el pago de servicios públicos, con el que concertaba encuentros personales para la entrega del dinero mensual o de legumbres, granos y frutas. Indica que entre el año 2003 y hasta diciembre de 2015 Juan camilo sostuvo una relación sentimental con Natalia Londoño, llevando a la fecha de la muerte 6 meses de estar separados por razones de infidelidad de parte de ella, iniciando el señor Barrientos una relación sentimental con Alba Lucía Arboleda, pero fue un evento que le generó una crisis depresiva que terminó con su suicidio a causa de la ingesta de un plaguicida. El 28 de julio de 2016 solicitó a Porvenir S.A la pensión de sobrevivientes como madre sin obtener respuesta.

NATALIA LONDOÑO ROMERO dio respuesta a la demanda de la interviniente en la que se opone a los hechos referidos a la ayuda económica habitual recibida como madre del causante y a la separación que se aduce ocurrió desde diciembre de 2015, señalando que la separación ocurrida para esa época obedeció a temas económicos y laborales que conllevaron a su traslado a Medellín a ocuparse como empleada del servicio doméstico, continuando con la relación sentimental con contacto cada ocho días en su descanso. Planteó como excepciones de fondo las de Ausencia de la calidad de beneficiaria, inexistencia de la obligación y falta de legitimación en la causa por activa.

Por su parte, PORVENIR S.A se pronunció advirtiendo no constarle la situación económica particular descrita con aceptación de la reclamación efectuada, acudiendo a la respuesta emitida de forma negativa. Formuló como medios de defensa las excepciones de inexistencia de la obligación, cobro de lo no debido, ausencia de derecho sustantivo y falta de causa en las pretensiones de la demanda, buena fe de la entidad demandada, prescripción, imposibilidad de dirimir el conflicto, compensación e improcedencia de imposición de condenas accesorias.

Por auto proferido el 16 de abril de 2021 el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Medellín en cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo CSJANT21-26 del

24 de febrero de 2021, se dispuso la remisión del proceso al Juzgado Veinticuatro Laboral del Circuito de Medellín -creado con carácter permanente-, despacho que asumió el conocimiento del trámite por decisión del 20 de mayo de 2021.

El 24 de mayo de 2021 el Juzgado Veinticuatro Laboral del Circuito de Medellín profirió sentencia en la que DECLARÓ probada la excepción de inexistencia de la obligación propuesta por la demandada. ABSOLVIÓ a la sociedad de las pretensiones impetradas en su contra por Natalia Londoño Romero y Ángela del Carmen Barrientos Escudero. CONDENÓ en costas a las demandantes, fijando por agencias en derecho la suma equivalente a un salario mínimo a su cargo por partes iguales.

El mandatario judicial de la demandante principal disiente plenamente de la decisión, cuestionando la validez probatoria dada sobre lo consignado en el historial clínico para definir sobre una separación en la pareja, pese a ser la fuente de esa información proveniente de Ana Julia Barrientos, a quien se le evidencia la animadversión contra Natalia Londoño. Señala que del análisis conjunto del extenso material probatorio, y específicamente de los dichos de Oscar Corchuelo y Marleny Uribe con los que precisamente se ataca la credibilidad de esa información, dieron fe acorde a unos dichos espontáneos y responsivos, que para la fecha de la muerte la convivencia seguía vigente con separación por razones de trabajo de Natalia Londoño en la ciudad de Medellín para asistir falencias económicas, pero con continuidad del vínculo y contacto personal cada fin de semana. Cuestiona entonces la decisión del fallador deslegitimar la prueba testimonial para dar validez de forma única a la historia clínica. Solicitó en estos términos la revocatoria de la sentencia para que en su lugar se acceda a las pretensiones de la demanda.

La interviniente excluyente por medio de su apoderado, también recurrió la decisión señalando que la testimonial de Ana Julia es pertinente y con alto valor probatorio para definir el asunto de Natalia Londoño. Adujo que debe tenerse la situación de precariedad en que vive la señora Angela del Carmen Barrientos, siendo evidente a su juicio que pese a recibir ayudas eventuales de sus demás hijos, dados sus ingresos y al tener a cargo a su hijo

discapacitado era natural que destinara la ayuda de Juan Camilo a los gastos de este y no a los de ella misma, referenciando la providencia SL512-2021. Señaló que no se presentó a reclamar las prestaciones sociales que había dejado causadas su hijo por ser su último interés el económico al encontrarse en duelo, agregando que en efecto Juan Camilo le brindaba una ayuda en especie con desconocimiento del salario realmente devengado, siendo preciso revisarse el aspecto de la dependencia, para proceder con el reconocimiento de la prestación pedida.

En el término pertinente, las partes presentaron sus alegaciones de segunda instancia, con argumentos semejantes a los expuestos en las etapas procesales transcurridas en primer grado.

CONSIDERACIONES

No es tema de discusión al interior del plenario que el señor Juan Camilo Barrientos Barrientos falleció el 13 de junio de 2016, pues ello así se desprende del historial clínico (fls. 197-200), evidenciado un yerro incluido en el Registro Civil de Defunción que la consignó para el 12 de junio de 2016 (fl. 15), dejando causado el derecho a la pensión de sobrevivientes, en razón de haber cotizado dentro de los 3 años anteriores a la muerte 108.85 semanas conforme se desprende de la relación de aportes expedida por Porvenir S.A (fls. 84-87).

De cara a lo anterior, y atendiendo los argumentos de la alzada, el problema jurídico a resolver por esta Sala de Decisión se circunscribe a establecer, si contrario a lo resuelto por el *A quo*, alguna de las solicitantes acreditó en debida forma el requisito de ley que las haga beneficiarias de la pensión de sobrevivientes perseguida en razón al óbito del afiliado Juan Camilo Barrientos acaecido el 13 de junio de 2016, Natalia Londoño Romero en su calidad de compañero permanente, o Ángela del Carmen Barrientos Escudero como madre del fallecido. Definida esa situación jurídica, se analizará la procedencia de imponer el pago de mesadas adicionales, los intereses moratorios o la indexación y costas procesales a cargo de Porvenir S.A.

Pues bien, para resolver el asunto se tiene que la normatividad aplicable acorde a la teoría del hecho causante es la vigente al momento en que acaeció la contingencia asegurada por lo que al haber ocurrido el deceso el 13 de junio de 2016, debe aplicarse lo que dispone el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003 para definir el derecho a la pensión de sobrevivientes deprecada, que señala los beneficiarios de la prestación, indicando textualmente lo siguiente de cara al tema:

“a) En forma vitalicia, el cónyuge o la compañera permanente o supérstite, siempre y cuando dicho beneficiario, a la fecha del fallecimiento del causante, tenga 30 o más años de edad. En caso de que la pensión de sobrevivencia se cause por muerte del pensionado, el cónyuge o la compañera permanente supérstite, deberá acreditar que estuvo haciendo vida marital con el causante hasta su muerte y haya convivido con el fallecido no menos de cinco (5) años continuos con anterioridad a su muerte;

b) En forma temporal, el cónyuge o la compañera permanente supérstite, siempre y cuando dicho beneficiario, a la fecha del fallecimiento del causante, tenga menos de 30 años de edad, y no haya procreado hijos con este. La pensión temporal se pagará mientras el beneficiario viva y tendrá una duración máxima de 20 años. En este caso, el beneficiario deberá cotizar al sistema para obtener su propia pensión, con cargo a dicha pensión. Si tiene hijos con el causante aplicará el literal a).

... d) A falta de cónyuge, compañero o compañera permanente e hijos con derecho, serán beneficiarios los padres del causante si dependían económicamente de este.”

Así, para la cónyuge o compañera permanente que pretenda ser beneficiaria de una pensión de sobrevivientes debe demostrar de manera cierta y convincente la convivencia por un espacio de 5 años con el causante, independientemente de sea un afiliado o un pensionado, en concordancia con lo definido por la SU 149 de 2021, que se opuso a la postura jurisprudencial de la H. Corte Suprema de Justicia -Sala de Casación Laboral- que determinó

como verdadero alcance del literal a) del art. 13 de la Ley 797 de 2003 a la luz del precepto constitucional de favorabilidad, *in dubio pro operario*, que el tiempo de convivencia mínima de cinco (5) años, solo es exigible en caso de muerte del pensionado (Ver SL1730-2020 reiterada en SL3843-2020, SL3785-2020, SL4606-2020, SL489-2021, SL362-2021, SL1905-2021, SL2222-2021 y SL5270-2021); con el argumento de violar tal decisión directamente los principios de igualdad y sostenibilidad financiera del sistema pensional sin justificación objetiva, y no armonizar con los propósitos de la pensión de sobrevivientes ni con los del requisito de convivencia.

Para el caso de la madre, su derecho resultará excluyente en el evento de probarse la presencia de cónyuge o compañera permanente en la vida del fallecido con derecho a acceder a la prestación, pero en el evento contrario, necesariamente debe demostrar una dependencia económica respecto del causante y probar la imposibilidad de auto sostenimiento, es decir que, sin el aporte del fallecido, no podía ni podría procurarse una vida digna (Ver SL1604-2022). Pero en voces de la Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Laboral la colaboración regular y simple no es suficiente para predicar la aludida dependencia, ya que la ayuda debe tener una connotación relevante, esencial y preponderante para el mínimo sostenimiento de la madre, y en el mismo sentido, se ha señalado que ese concepto legal de dependencia supera la simple subsistencia, pues se trata de garantizar unas condiciones dignas de vida (Ver SL1804-2018, SL4217-2018 y SL1386-2022)

En tales contextos, debe brotar del acervo probatorio en primera medida que existió con Natalia Londoño Romero y el difunto Juan Camilo Barrientos Barrientos una convivencia ininterrumpida y permanente de por lo menos 5 años anteriores a su muerte, entendida esta como la *“comunidad de vida, forjada en el crisol del amor responsable, la ayuda mutua, el afecto entrañable, el apoyo económico, la asistencia solidaria y el acompañamiento espiritual, que refleje el propósito de realizar un proyecto de vida de pareja responsable y estable, a la par de una convivencia real efectiva y afectiva- durante los años anteriores al fallecimiento del afiliado o del pensionado”* (Ver SL3813-2020 y SL5540-2021 que traen a colación la SL1399-2018).

Al respecto, se cuenta con una declaración extrajuicio rendida por el afiliado el 03 de febrero de 2012 (fl.25) donde se vislumbra el reconocimiento de, una vida en unión libre compartida con Natalia Londoño desde 10 años atrás, estando registrada junto con su hija Katy Julieth en la EPS a la que se encontraba afiliado, como sus beneficiarias, declaración que a más de provenir del causante generador de la prestación, es aceptada por parte de su madre Ángela del Carmen Barrientos desde su escrito de demanda y así lo corrobora en su interrogatorio de parte, al advertir que su hijo hizo vida marital con la accionante desde el año 2003 y hasta diciembre de 2015, data última igualmente referenciada por Ana Julia Barrientos - Hermana-, estando en discusión en esos términos, el requisito de convivencia los últimos meses de vida del actor comprendidos entre enero y el 13 de junio de 2016 cuando acaeció el infortunio.

Para ese fin, la promotora de esta acción judicial allegó como prueba testimonial los dichos de OSCAR CORCHUELO CASTAÑEDA, MARIA MARLENY URIBE BARRIENTOS y GILBERTO ALONSO LONDOÑO ROMERO, cuyas declaraciones habrán de relacionarse a continuación y analizarse de manera pormenorizada por rodear el disenso de uno de los recursos precisamente en la valoración probatoria, testigos que coincidieron en advertir que la convivencia de la pareja surgió en el Municipio de Belmira - Antioquia donde fueron criados, iniciando cuando Katy Julieth contaba con 2 años de edad, lo que nos arriba aproximadamente al año 2002-2003 (fl.25) cuando Natalia tenía 15 años, misma que se extendió hasta la fecha de la muerte de Juan Camilo Barrientos ocurrida en junio de 2016, precisándose por Oscar y Gilberto Alonso que desde principios de esa anualidad Natalia tuvo que trasladarse a laborar al Municipio de Medellín por dificultades económicas, con el fin de aportar al hogar, dada la condición especial de salud que padecía Katy siendo requerido un tratamiento que implicaba transporte 3 veces por semana, sin que ello implicara la terminación del vínculo pues en los descansos de Natalia dados los fines de semana, eran dedicados a su compañero y a su hija en la casa que se les tenía asignada dentro de la finca de lechería donde él laboraba como mayordomo, afirmando cada testigo sobre el desconocimiento que se haya presentado alguna separación o problema de

trascendencia, agregando no observar ninguna conducta extraña en Juan Camilo ni conocer de problemas familiares o personales de importancia.

Ya de forma específica y particular, OSCAR CORCHUELO CASTAÑEDA, quien fungió como Jefe Directo de Juan Camilo entre 2013 y 2016 dentro de la Agropecuaria Cañas Bravas y Agropecuaria Las Huertas donde el dueño era Daniel Isaac Montoya, de todos los deponentes surge ser quien mayor convicción revela a esta Sala de decisión, en tanto además de ser nulo su interés en las resultas del proceso, fue espontáneo, concreto y contundente en cada respuesta brindada a partir de su conocimiento directo, aduciendo que todos los días debía visitar las fincas que integraban las Agropecuarias, dentro de las que se encontraban la Finca Caña Brava y la Finca Loma Linda donde prestó sus servicios Juan Camilo Barrientos, empleado bajo su mando, teniendo contacto diario con este y de forma especial aunque no acostumbraba a relacionarse con las familias de los mayordomos, con su hija Katy con quien se generó empatía por su condición médica, enfatizando en múltiples oportunidades dentro de su declaración que la única familiar y pareja del trabajador conocida por él fue Natalia Londoño Romero, a quien le avisó sobre el incidente ocurrido con el veneno dentro de la finca, le fueron entregadas las prestaciones sociales causadas por Juan Camilo y se le autorizó el retiro de los enseres de la casa. Explicó conocer la situación de traslado de Natalia a Medellín y la necesidad económica que los aquejaba, porque conoció de préstamos pedidos por Juan Camilo a sus patrones para cubrir los requerimientos médicos de Katy y entre los mismos compañeros se hacían colectas para brindarle colaboración en este sentido. Afirmó que dentro de sus funciones administrativas estaba la coordinación del ingreso y salida de trasteos cuando se contrataba a un mayordomo, conociendo las personas que residían, entraban y salían, sin que persona distinta a Natalia Londoño en momento alguno fuera visualizada en las instalaciones proporcionadas para la residencia, pudiendo verificar su presencia aun cuando ya laboraba en Medellín, los fines de semana, misma que le dejaba ropa arreglada a su compañero y comida congelada para su manutención en la semana.

GILBERTO ALONSO LONDOÑO ROMERO también dio cuenta de que cada ocho días su hermana Natalia luego de terminar sus labores en Medellín, recogía a su hija Katy en Belmira - Antioquia, pues era cuidada por su madre Flor María por las labores de la pareja, y de ahí retornaban a la Finca ubicada en San Pedro para compartir con Juan Camilo, estando presente en las visitas pues vivía allí con su madre, oportunidades en las que muchas veces las acompañaba hasta la finca y se quedaba allí donde observaba que la relación continuaba, o les colaboraba para el traslado de la menor, además que siempre cada mes como familia acudieron a visitar a su madre de un día para otro, enfatizando en que nunca hubo una real separación entre ellos, pues ello solo ocurrió por la necesidad de Natalia de obtener un ingreso económico pero siempre se mantuvieron unidos, viendo a Juan Camilo junto a su hermana Natalia por última vez ocho días antes de la muerte cuando acudieron como familia a visitar a su madre Flor María como de costumbre. Asistió a las exequias, donde acudió Natalia y la familia de Juan Camilo, incluida la mamá y la hermana Ana Julia.

MARIA MARLENY URIBE residente de Belmira - Antioquia explicó que podía ver la vigencia del vínculo de Natalia con Juan Camilo en las visitas mensuales que realizaban junto con Katy para visitar a la madre de la demandante, desprendiéndose de las conversaciones entabladas la vigencia de la convivencia, quienes se observaban como una pareja normal, siendo invitada en varias oportunidades a las fincas donde residían sin que hubiera acudido, desconociendo de otra relación sentimental de Juan Camilo, habiendo presenciado la última visita como familia al Municipio, ocho días anteriores al deceso. Asistió a exequias, donde compareció Natalia y la familia del fallecido.

Conviene advertir, que con las deponencias de Ana Julia Barrientos y Paula Andrea Duque se pretendieron derruir las afirmaciones insertadas en el escrito de demanda principal y lo advertido por los declarantes previamente referenciados, buscando convencer que Juan Camilo desde enero de 2016 y hasta su deceso convivió como compañero permanente con Paula Andrea Duque en las fincas donde laboró, habiéndose presentado una separación

desde ese mismo mes con Natalia por razones de infidelidad y violencia de parte de ella; sin embargo, sus declaraciones en conjunto con el interrogatorio de parte de Ángela del Carmen Barrientos resultan ser precisamente sobre el período de los últimos seis meses de vida del afiliado, tan confusas, incoherentes y ambiguas que permiten aseverar que muchos de sus dichos son contrarios a la verdad, o por lo menos, no generan la convicción necesaria para darles valor.

Y es que no es dable obviar que desde el escrito de demanda de la interviniente se adujo en el hecho quinto que Juan Camilo estaba iniciando una relación sentimental con Alba Lucía Arboleda, pero dentro de la práctica de pruebas, se adujo por Ana Julia que desde el mismo momento en que se dio la separación presentada con Natalia en enero de 2016, su hermano había iniciado una convivencia que se extendió hasta la muerte con Paula Duque. Asimismo, Angela Barrientos advirtió en dos oportunidades que su hijo para la muerte se encontraba viviendo solo, pero al preguntársele por Paula Duque señala que los últimos meses convivió como pareja con esta, con quien lo vio quince días antes de la muerte en una fiesta, con manifestación previa en la que adujo que había tenido contacto personal con él por última vez dos meses antes cuando informó sobre la periodicidad de la “*liga*” que le suministraba.

Paula Duque por su parte, aseguró haberse trasteado desde el 26 de enero de 2016 a la finca Loma Linda para convivir como pareja con Juan Camilo por encontrarse ya separado de Natalia Londoño, señalando ser la conocedora del suceso ocurrido ese 13 de junio, sobre quien nunca fue autorizada su entrada a la finca por el encargado Oscar Corchuelo, ni fue vista residiendo allí ni conocida como pareja del trabajador, generando mayor asombro y rareza que aduzca que su compañero permanente fallece, pero no acude a la clínica pese a encontrarse en la ciudad de Medellín a donde fue remitido, porque “*estaba haciendo sus vueltas*”, que estuvo presente en el velorio hora y media porque debía ir a recoger a sus hijos en otro Municipio donde se los estaba cuidando una amiga y “*la dejaba el bus*”, y que no asistió al entierro.

Ya Ana Julia para dar fe sobre la convivencia surgida con Paula y el deterioro y fractura de la relación con Natalia Londoño, aseguró que Juan Camilo permaneció siempre más tiempo en Medellín que con aquella por dificultades continuas, lo que resulta improbable dada la continuidad presentada en sus labores en por lo menos los últimos 2 años, según se desprende del historial laboral (fls. 84-87) y de las declaraciones de Oscar Corchuelo quien siempre los vio juntos en el tiempo servido que estuvo a su cargo con la evidente posibilidad de evidenciar condiciones personales y familiares del trabajador por el oficio y el lugar donde compartía techo con Natalia, y de Gustavo Alonso quien como miembro de la familia da fe de la permanencia del vínculo, siendo por demás contraria esa aseveración a lo aceptado por la madre del fallecido desde su escrito de demanda. Atestiguó haber visitado el lugar en el que se ejecutó la relación con Paula Duque y donde pudo evidenciarla, al que acudía cada ocho días, expresando posteriormente con algo de desorientación que nunca conoció la última finca donde laboró su hermano y que la relación con Paula la visualizaba realmente en los encuentros dados en una cafetería de unos familiares ubicada en San Pedro, presentando una confusión patente al confrontarla con la información que al respecto ofreció, además de no resultar concordante con la versión de Oscar Corchuelo que se itera, se le otorga absoluta veracidad, cuando enfatizó en no haber conocido ningún otro familiar de Juan Camilo lo que incluye por supuesto a su hermana y a su madre, con lo que entiende esta Sala que nunca lo visitaron. Igualmente, advirtió Ana Julia que era Paula quien tenía acceso al documento de identidad de Juan Camilo por la relación de compañeros que sostenían, con quien se comunicó para que desde San Pedro se la remitiera por un envío exprés pues arribó a la Clínica Pablo Tobón Uribe como N.N, señalando al mismo tiempo que Paula se encontraba en Medellín atendiendo una cita médica de su hija.

También debe decirse que, las circunstancias maritales atribuidas a Natalia Londoño por Ana Julia - infidelidad y violencia (golpes, manteca caliente en rostro)- y que se indicó generaron la separación en enero de 2016, ocurrieron dentro del entorno laboral, siendo acusados actos de infidelidad con un compañero de trabajo de Juan Camilo, sin que ello fuera advertido por Oscar, quien por rumores o conocimiento directo se hubiera percatado de las

evidencias físicas de maltrato y de la aducida infidelidad ocurrida dentro del mismo ámbito de trabajo en el que también participaba, y contrario a ello, ninguna situación de especial ocurrencia destacó que diera lugar a una razón distinta al trabajo obtenido por Natalia en Medellín, para darse la separación de cuerpos entre semana.

Estas por no mencionar de forma detallada todas las inconsistencias encontradas en los dichos de Ana Julia Barrientos y Paula Andrea Duque, son circunstancias que no permiten dar veracidad a sus declaraciones de quienes logra percibirse un ánimo de tergiversar cierta información en favor de Ángela del Carmen Barrientos y en contra de los intereses de Natalia Londoño, persona evidentemente apartada de los afectos de la madre y hermana del fallecido, y sobre quien a juicio de esta Colegiatura si logra desprenderse una convivencia continua e interrumpida únicamente por razones de trabajo, debiendo acudir a la noción de convivencia recalcada por la Corte Suprema de Justicia en la sentencia CSJ, 10 may. 2007, rad. 30141, reiterada en las providencias SL12029-2016 y 4767-2021, misma que no se limita al simple hecho de residir en una misma casa, sino que deben examinarse otras circunstancias adyacentes, relativas a la existencia consciente del vínculo marital, el apoyo moral, material y efectivo y, en general, el acompañamiento espiritual permanente que de la plena convicción de que existía un proyecto mancomunado de vida como pareja y que no ha sido la intención de los esposos finalizar por completo su unión matrimonial, sino que por situaciones ajenas a su voluntad, en muchos casos por solidaridad, familiaridad, hermandad y diferentes circunstancias de la vida, muy lejos de pretender una separación o ruptura de la pacífica cohabitación, hacen que la unión física no pueda mantenerse dentro de un mismo lugar.

Así, lo que puede extraerse de las probanzas analizadas en todo su conjunto, es que la pareja de Natalia Londoño y Juan Camilo Barrientos siempre tuvo el ánimo de conservarse como familia, incluso, cuando por la fuerza de las circunstancias, que en este evento atiende a situaciones laborales y económicas, debieron pactar la separación entre enero y junio de 2016 para

continuar los fines de esa vida en común que decidieron forjar desde el año 2003, dentro de los que se encuentra el apoyo económico, el auxilio mutuo y la asistencia solidaria, derivados de la asunción de la crianza de Katy Julieth de parte de Juan Camilo hasta el último momento de su existencia con búsqueda de recursos para solventar los gastos médicos, la decisión de Natalia buscar ingresos para apoyar a su compañero en los egresos del hogar que solo corrían por su cuenta, el frecuente encuentro familiar tanto en la Finca como en Belmira- Antioquia con la familia de Natalia, la atención de la demandante frente a Juan Camilo al dejar en su ausencia ropa limpia y alimentación a su mano, no encontrando con suficiencia necesaria, que a más de la razón objetiva de separación ya aducida, se presentara el ánimo y voluntad de dar fin al vínculo, pudiendo desprenderse de los dichos de Gustavo Alonso y Oscar, apoyado en el más escaso testimonio de Marleny Uribe que la sujeción familiar continuó viva y actuante hasta la muerte.

No en vano las prestaciones sociales fueron reclamadas y entregadas a Natalia Londoño como compañera permanente por quienes fungieron como sus empleadores (fl. 234) sin interés de terceros de acceder a tales rubros, y aunque no es determinante, se funda como apoyo a lo anterior, la afiliación en salud como sus beneficiarias hasta el deceso de Natalia y Katy como compañera e hija respectivamente (fls. 26).

Es necesario también anunciar que si bien es cierto, el historial clínico de Juan Camilo Barrientos da cuenta de un proceso de separación (fl. 198), ello además de no corresponder a las locuciones que aseguraron que la separación ya estaba materializada desde el mes de enero y que profesaba una nueva unión marital, proviene del dicho de Ana Julia Barrientos - hermana-, pues así quedó consignado, y claramente no hubo persona distinta que ante el Hospital Pablo Tobón Uribe suministrara información personal del paciente ese 13 de junio, ni pudo hacerlo él mismo por las críticas condiciones en las que fue atendido previa remisión del Municipio de San Pedro, debiendo reiterarse la evidente mala relación que la fuente de esa reseña presentaba con la petente, por lo que si bien no es dable admitir una premeditada

afectación a la prestación de Natalia Londoño como bien lo coligió el *A quo*, si es posible predicar su exclusión como familiar para hacerse frente a la situación presentada, por lo que mal podría darse valor pleno y único a esta documental en coherencia con lo definido en esta instancia frente a una declaración acomodada y parcializada, desechando el restante material probatorio con el que se cuenta, y del que pueden acogerse con mayor convicción y certeza las circunstancias maritales del fallecido y que no se compadecen con las descritas por Ana Julia para la ocurrencia del evento desafortunado, ni dentro del presente escenario.

Bajo todas las anteriores reflexiones, esta Sala de decisión considera a partir del principio de la libre formación del convencimiento basado en la sana crítica, que contrario a lo decidido por el *A quo* se encuentra adecuadamente probada la convivencia de Natalia Londoño Romero con Juan Camilo Barrientos desarrollada entre el año 2003 y hasta el 13 de junio de 2016 cuando ocurrió la muerte, con separación de cuerpos surtida desde el mes de enero por razones foráneas a la voluntad de la pareja, pero conservando una vocación de convivencia, sin que se cuente con vestigios de mayor peso que desvirtúen lo concluido, lo que deriva en el reconocimiento de su calidad de beneficiaria de la prestación por muerte como compañera permanente del causante, la que habrá de otorgarse de manera temporal en razón a que para el deceso Natalia Londoño contaba con 27 años de edad según se extrae de su registro de nacimiento (fl. 135), y así fue establecido por el legislador en el literal b) del artículo 47 de la Ley 100 de 1993.

Lo anterior, releva a Ángela del Carmen Barrientos Escudero del derecho a concurrir en su calidad de madre como beneficiaria de la prestación acorde al previamente transcrito literal d) del ya mencionado artículo 47 de la Ley 100 de 1993, sin necesidad de ahondar en el asunto de la dependencia económica alegada y que era de su resorte acreditar.

En lo que atañe al monto de la pensión, se tiene que el mismo se define en un salario mínimo legal mensual vigente, acorde a lo que se desprende de la relación de aportes expedida por Porvenir S.A (fls. 84-87) de donde se desprende que aun cuando hubo períodos en los que el trabajador devengó

sumas superiores al salario mínimo, el IBL correspondiente a todo el tiempo cotizado conforme a los parámetros del artículo 21 de la Ley 100 de 1993 resulta en un valor inferior, debiendo darse respeto al contenido del inciso tercero del artículo 48 del mismo estatuto de la Seguridad Social. Ya en cuanto a la fecha de disfrute de la prestación y el valor del retroactivo pensional, ha de señalarse que el derecho se encuentra causado desde el momento en que ocurrió la contingencia, esto es, el 13 de junio de 2016 siendo esta la misma fecha del reconocimiento del derecho, en la medida que no se permitió transcurrir el término trienal de que tratan los artículos 488 del CST y 151 del CPTSS para que opere la prescripción, pues la reclamación ante la sociedad demandada la efectuó la demandante el 25 de enero de 2017 (fl. 119) y la demanda fue presentada el 11 de abril de 2019 según acta individual de reparto.

En tales términos se tiene que el valor de las mesadas mínimas a pagar desde el 13 de junio de 2016 y hasta el 31 de mayo de 2022 con base en 13 mesadas anuales por causarse la prestación con posterioridad al desmonte de la mesada 14 - Acto Legislativo 01 de 2005-, corresponde a \$63.953.426 como se detalla a continuación, monto del que deben descontarse las cotizaciones para el sistema de seguridad social en salud en atención a los artículos 157 y 203 de la Ley 100 de 1993, 26 del Decreto 806 de 1998 y la jurisprudencia de la H. Corte Suprema de Justicia SL 7061-2016, debiendo continuarse pagando a partir del 01 de junio de 2022 una mesada pensional equivalente a \$1.000.000 sin perjuicio de los incrementos de ley, y hasta el 12 de junio de 2033, cuando se cumple el término de 20 años dispuesto por la norma.

AÑO	VR. MESADA	Nº MESADA	TOTAL
2016	\$ 689.455	7,57	\$ 5.219.174
2017	\$ 737.717	13	\$ 9.590.321
2018	\$ 781.242	13	\$ 10.156.146
2019	\$ 828.116	13	\$ 10.765.508
2020	\$ 877.803	13	\$ 11.411.439
2021	\$ 908.526	13	\$ 11.810.838
2022	\$ 1.000.000	5	\$ 5.000.000
		TOTAL	\$ 63.953.426

Sobre los intereses de mora deprecados, debe partirse del artículo 141 de la Ley 100 de 1993, el cual establece que en caso de mora en el pago de las mesadas pensionales o el no pago de mesadas dentro del plazo previsto en la ley para el otorgamiento de la pensión, la entidad correspondiente reconocerá y pagará al pensionado, además de la obligación a su cargo y sobre el importe de ella, la tasa máxima de interés moratorio vigente en el momento en que se efectúe el pago.

Para determinar la procedencia de dicho gravamen, dada su naturaleza resarcitoria, no ha de someterse al estudio de la conducta de la administradora de pensiones o revisar si su actuar estuvo revestido de buena fe, pues solo basta con que se verifique una tardanza en el pago; sin embargo, se han dispuesto unos eventos en los que se exceptúa el pago de los mismos, como cuando su proceder está revestido de un acatamiento de la disposición legal, sin poder prever futuros análisis o cambio de criterios jurisprudenciales, verbigracia, entorno a su validez o aplicación en el tiempo, como cuando ocurre con el requisito de fidelidad o aplicación de la condición más beneficiosa (CSJ SL16390-2015 y CSJ SL2941-2016 y CSJ SL984-2019); cuando existe conflictos entre posibles beneficiarios o titulares de la prestación, que deben ser atendidos por la jurisdicción ordinaria (CSJ SL1399-2018 y CSJ SL4599-2019), entre otros.

Bajo las anteriores previsiones, como en el asunto el debate tuvo como eje una de las hipótesis admitidas por la jurisprudencia para exonerar a la administradora de los intereses moratorios, se tiene que Porvenir S.A no tiene a su cargo los intereses moratorios pretendido, por cuanto es patente que ante la administradora se presentó una controversia de pretensas beneficiarias excluyentes entre sí, resultando necesario la intervención judicial para definir a partir de un escenario probatorio amplio y un examen de fondo el derecho perseguido, que no le era propio de definir al Fondo (Ver SL5484-2021, SL1707-2021, SL 966-2021, SL3785-2020).

No obstante, habrá de ordenarse la indexación de la condena, que no es una condena en sí misma considerada, sino que con ella se surte la corrección monetaria a fin de solucionar el detrimento económico cuando no se pagan

oportunamente las prestaciones del Sistema sin miramientos de la buena o mala fe de las partes. Indexación que deberá ser calculada hasta el momento del pago efectivo de la obligación que aquí se impone frente a cada mesada.

Conforme a todo lo expuesto, y en síntesis, se revocará parcialmente la decisión objeto de alzada en cuanto se absolvió a la demandada de todas y cada una de las pretensiones invocadas en su contra por Natalia Londoño Romero, para en su lugar, condenar a Porvenir S.A a reconocer y pagar a la demandante principal la pensión de sobrevivientes a partir del 13 de junio de 2016 con reconocimiento del retroactivo pensional causado desde esa data con reconocimiento de la indexación hasta la fecha del pago. Se confirmará en lo demás.

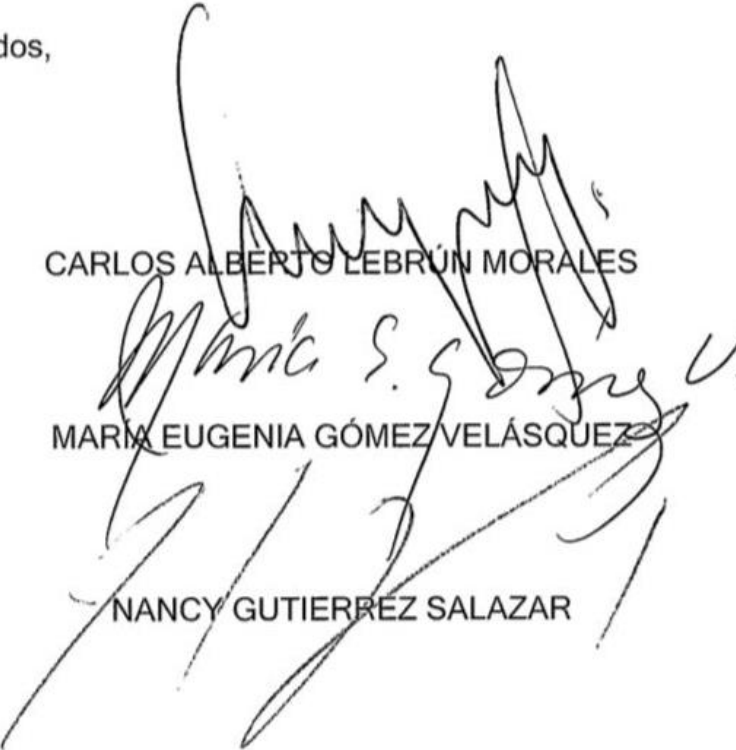
En esta instancia no se causaron costas procesales por los resultados del recurso.

DECISIÓN:

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior de Medellín, Sala cuarta de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, **REVOCA PARCIALMENTE** la sentencia apelada, de fecha y procedencia indicadas y en su lugar, **CONDENA** a Porvenir S.A al reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes en favor de NATALIA LONDOÑO ROMERO con ocasión de la muerte de su compañero permanente JUAN CAMILO BARRIENTOS BARRIENTOS de forma temporal en los términos del literal b) artículo 47 de la Ley 100 de 1993, en cuantía de un salario mínimo legal mensual vigente, a partir del 13 de junio de 2016, con un retroactivo calculado hasta el 31 de mayo de 2022 de \$63.953.426 a razón de 13 mesadas por año, del que se autoriza descontarse las cotizaciones al Sistema de Seguridad Social en Salud, con indexación hasta tanto se verifique el pago. A partir del 1 de junio de 2.022 deberá seguirse reconociendo una mesada pensional equivalente a \$1.000.000 sin perjuicio de los incrementos anuales de Ley y la pérdida del derecho cumplidos los 20 años del otorgamiento del derecho. **CONFIRMA** en lo demás.

Notifíquese la presente decisión por EDICTO (num.3°, lit. d., art. 41 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social en concordancia con el auto 550-2021 CSJ).

Los Magistrados,



CARLOS ALBERTO LEBRÚN MORALES

Maria E. Gómez Velásquez

MARIA EUGENIA GÓMEZ VELÁSQUEZ

NANCY GUTIERREZ SALAZAR

**REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
SALA LABORAL**



SECRETARÍA

EDICTO

El Secretario de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medellín:

HACE SABER:

Que se ha proferido sentencia en el proceso que a continuación se relaciona:

Radicación: 05001310500520190025201
Proceso: Ordinario
Demandante: NATALIA LONDOÑO ROMERO
Demandado: A.F.P. PORVENIR S.A
M. P. CARLOS ALBERTO LEBRUN MORALES
Fecha de fallo: 18/07/2022
Decisión: CONFIRMA Y REVOCA PARCIALMENTE

El presente edicto se fija por el término de un (01) día hábil, con fundamento en lo previsto en el artículo 41 del CPTSS, en concordancia con el artículo 40 *ibidem*. La notificación se entenderá surtida al vencimiento del término de fijación del edicto.

Se fija hoy 19/07/2022 desde las 08:00 am. y se desfija a las 05:00 pm.

RUBÉN DARÍO LÓPEZ BURGOS

Secretario